

dar al mismo acuerdo el carácter y fuerza legal de una transacción, era necesario el otorgamiento de una escritura pública, y que esta se registrara en la forma debida según lo previene el artículo 3341 del mismo Código civil, y no hay constancia de que así se haya verificado; 4º: que aun cuando la supuesta transacción se hubiera elevado á instrumento público, haciéndose en el Registro la inscripción correspondiente, mientras no se liberase la hipoteca primitiva que afecta toda la finca y cada una de sus partes, esa hipoteca debe surtir sus efectos, según lo previene el artículo 2037, y uno de esos efectos consiste en que el acreedor hipotecario pueda ejercitar su acción contra cualquier poseedor de la finca ó de alguna de sus partes, pues los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen á manos de un tercer poseedor, conforme al artículo 1941.

Considerando: que según lo que va expuesto, está espedita la acción del Ayuntamiento, por lo menos para asegurar el pago de lo que adeuda la hacienda de Aragon, salvo en todo caso lo que los tribunales resuelvan acerca del valor del acuerdo de 25 de Agosto de 1871, de las obligaciones que impone al Ayuntamiento y de la estension legal de esas mismas obligaciones.

Por las consideraciones y fundamentos legales expuestos, la Suprema Corte de Justicia revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez 1º de Distrito en 22 de Agosto último, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Juan Vega y Alvarez, representante de la Señora Iradiño Alegre, contra el acuerdo del Ayuntamiento de esta Capital que mandó proceder ejecutivamente contra la hacienda de Aragon, en la en parte que tal acuerdo fué ejecutado embargando la fraccion de la misma finca que posee dicha Señora, mientras el procedimiento de la Tesoreria municipal se limita á asegurar los derechos del municipio en los términos que lo permite el uso

legítimo de las facultades económico-coactivas.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 18 de 1873.
—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido por Gustavo Levy, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 19, 20 y 21 de la Constitucion, con el hecho de determinarse su expulsion de la República como extranjero pernicioso.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Agosto 30 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Gustavo Levy, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 19, 20 y 21 de la Constitucion, con el hecho de determinarse su expulsion de la República como extranjero pernicioso; visto el informe de la autoridad respectiva; el auto por el que el Juzgado negó la suspension del acto solicitado por el quejoso; lo pedido por la parte Físcal; y visto en fin lo que verse debía, y Considerando; 1º: que tanto por la razon general ó espiritual de la ley regla-

mentaria de 20 de Enero de 1869, cuanto por la prevencion especial del artículo 23, el quejoso en la tramitacion de los juicios de amparo, no tienen derecho á la interposicion de los recursos del órden comun; de tal suerte, y supuesto el citado artículo, que puede y debe continuarse el juicio hasta la sentencia definitiva, sin que obste en estricto derecho ni como causa de nulidad, que al interesado no se dé por citado ó notificado en algun trámite ó resolucion, ó bien que dichas diligencias no se practiquen por su falta ó ausencia, pudiéndose en tales casos y segun sean éstos, sobreseerse en el juicio ó pronunciarse sentencia definitiva sobre la materia. Considerando, 2º: que en el presente juicio son de aplicarse estos procedimientos, tanto mas, cuanto que habiéndose negado por el Juzgado la suspension del acto, el Supremo Gobierno ha estado expedito para cesar de sus facultades, llevando á efecto la expulsion del quejoso. Considerando, 3º: con respecto á la calificacion de si se ha efectuado ó no la violacion de garantías por las que el presente juicio se interpone: que tratándose como se trata del uso y ejercicio de la facultad discrecional que para la expulsion de extranjeros perniciosos concede al Ejecutivo el artículo 33 de la Constitucion, ninguna garantía individual puede reputarse violada cuando aquella facultad se ejercita como en el caso contra extranjeros no comprendidos en la fracciones 1ª y 2ª del artículo 30 constitucional, y sin que para los principios expresados obste el que el extranjero, objeto de la determinacion, sea ó no en realidad pernicioso, por que esa calificacion es peculiar y exclusiva de la autoridad á quien la Constitucion la encomienda, y porque en general debe tenerse como regla en la materia de resolucion para los juicios de amparo, que las autoridades judiciales federales en su competencia y ejercicio de las atribuciones que designa la fraccion 1ª del artículo 101 de la Constitucion, no son evisoras de los actos de las demas autori-

dades para efectos de enervar, corregir ó reprobando un procedimiento, por ser ó no estrictamente arreglado á una ley, sino tan solo para resolver en el punto de la violacion de las garantías que como tales designa la Constitucion, lo que patentiza el hecho, de que con frecuencia se suele violar una garantía no obstante de ser el acto arreglado á una ley, ó al contrario, desviarse la autoridad de lo prevenido por esta, y al mismo tiempo no efectuarse violacion de garantías; por tales razones pues, y atento lo pedido por la parte fiscal, se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al extranjero Gustavo Levy, contra lo dispuesto por el Ministerio respectivo, para su expulsion del país en uso de la facultad que al Ejecutivo concede el artículo 33 constitucional, por no violarse con tal acto garantía alguna individual de las que el citado Código general otorga. Hágase saber; remítase copia de este fallo al "Semanario Judicial" y "Diario Oficial," y previa citacion fiscal, elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia, para su revision. Lo decretó firmó, el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fé. —José María Canalizo.—Fernando Zamora, secretario.

Es copia, México, Agosto 30 de 1873.
—Fernando Zamora, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 24 de 1873.—Visto el presente recurso de amparo promovido en 2 de Agosto último por el súbdito frances Gustavo Levy, por violacion en su persona de las garantías que otorgan los artículos 19, 20 y 21 de la Constitucion general de la República, por alegar que sin motivo fundado fué reducido á prision de órden del Gobierno del Estado de Morelos, por la autoridad política de Cuautla en 29 de Junio del presente año; que despues de

diez y ocho días de prision en el referido lugar, fué trasladado á Cuernavaca, y de este último punto á esta Capital á donde llegó el día 1º de Agosto, continuando en prision, y segun se le dijo á disposicion del Ministerio de Gobernacion; que en consecuencia, en la fecha en que ocurrió pidiendo amparo contra estos procedimientos á la Justicia de la Union, llevaba treinta y cinco días de estar privado de su libertad, sin que se le hubiera hecho saber la causa del procedimiento ni el auto de formal prision, ni la autoridad judicial competente á cuya disposicion se consignaba, con cuyos hechos y omisiones se violaban los artículos 19, 20 y 21 de la Constitucion. Vistas las constancias que obran en estas actuaciones, y la sentencia que en 30 de Agosto último pronunció el C. Juez 2º de Distrito de esta Capital, en la que se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al extranjero Gustavo Levy, contra lo dispuesto por el Ministerio respectivo para su expulsion del país en uso de la facultad que al Ejecutivo concede el artículo 33 constitucional, por no violarse con tal acto garantía alguna individual de las que el citado Código general otorga.

Considerando: que aunque no se abrió término probatorio para comprobar la verdad de los hechos alegados por el quejoso, si consta de una manera indudable por el informe justificado del Ministerio de Gobernacion, que por lo menos desde el 23 de Julio último hasta el 2 de Agosto siguiente, el extranjero de que se trata había estado privado de su libertad por orden del Gobierno del Estado de Morelos, quien lo remitió á esta Capital á disposicion del Supremo Gobierno acusándolo de no ocuparse de alguna profesion honesta, y de que por su propio dicho (el del acusado) aparecía haber tomado parte en las cosas políticas del país; y que en el mismo informe del expresado Ministerio, aparece: que el C. Presidente de la República, en uso de la facultad que le concede el artículo 33 de la Cons-

titucion, había determinado con fecha 31 de Julio, que fuera expulsado del territorio de la República el referido extranjero Gustavo Levy, de donde resulta: que cuando en 2 de Agosto ocurrió este en demanda de proteccion y amparo contra su prision arbitraria, ya estaba resuelta por el Supremo Gobierno su expulsion del territorio nacional.

Considerando: que en semejante situacion, la autoridad judicial que conocía del recurso de amparo interpuesto, no contra la orden de expulsion, sino contra la prision inmotivada del quejoso, ha debido limitar su resolucion á la materia del juicio, determinada de una manera clara y terminante por el actor, sin comprender en su fallo declaracion alguna acerca de la legalidad constitucional de la orden de expulsion, pues la demanda del quejoso no comprendió este punto.

Considerando: que una vez dictada la orden de expulsion, quedaba motivada la prision del expulso, pues tratándose de una persona de la condicion de Levy, debía temerse fundadamente que si se le dejaba en el uso de su libertad, eludiría la orden de salir del territorio nacional; pero que esto, no obstante la prision anterior decretada y hecha efectiva por el Gobierno del Estado de Morelos, había importado la violacion de las garantías constitucionales invocadas por el quejoso.

Considerando: que si bien la declaracion de esa violacion y el amparo otorgado en consecuencia por la Justicia de la Union, carecian de objeto práctico por tratarse de hechos consumados, y no ser posible restituir al amparado al goce de su libertad, la declaracion hecha en este sentido por la autoridad judicial, siempre tiene un objeto importante, cuales es el de consignar de una manera solemne que la Justicia de la Union está siempre dispuesta á hacer prácticas y efectivas las garantías individuales que reconoce la Constitucion federal, y á pronunciar un fallo de reprobacion contra los actos

que las violan; y que por lo mismo, el fallo del Juez de 1ª instancia ha debido concretarse á este punto, concediendo ó negando el amparo que se le pidió, sin complicar ni confundir con la única materia del juicio, apreciación alguna relativamente á la facultad constitucional que concede al Ejecutivo el artículo 33 de la Constitución, sin que para proceder en los términos que lo hizo el citado Juez, sea razón bastante que tuvo conocimiento oficial de la expulsión decretada, y que el Promotor fiscal, incidiendo el primero en el error del Juzgado, haya pedido respecto de la orden de expulsión, desentendiéndose de la verdadera y única materia del debate.

Por tales consideraciones, y con fundamento en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, la Suprema Corte de Justicia declaró: que se reforma la sentencia del Juzgado 2º de Distrito en los términos que expresan las siguientes proposiciones: Primera: la Justicia de la Unión ampara y protege al súbdito francés Gustavo Levy, contra los procedimientos arbitrarios del C. Gobernador del Estado de Morelos, que ordenó reducir á prisión al expresado Levy, manteniéndolo en ella con notable exeso del término legal de una detención, y con infracción de los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución federal. Segunda: no se hace de claración alguna relativamente á la expulsión del mismo súbdito francés Gustavo Levy decretada por el Supremo Gobierno, por no haberse pedido amparo contra esta providencia ni poderse seguir los juicios de esta especie sino á petición de la parte agraviada. Tercera: manifiéstese al C. Juez de Distrito y Promotor fiscal del Juzgado, que en lo sucesivo cuiden, el segundo de pedir con relación á la demanda del quejoso, y el primero de resolver sobre ella, sin extender su resolución á puntos no comprendidos en la demanda.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; pu-

TOMO V.—PARTE II.

blíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría respecto del primer punto, y por unanimidad respecto de los dos siguientes, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 9 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por los reos Donaciano Huerta, Juan José y Felipe Flores, contra las providencias de la Gefatura política del Estado, que los condenó á sufrir la pena de muerte como salteadores.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que el C. Gefe político al sentenciar á la pena de muerte á los reos Donaciano Huerta, José Juan y Felipe Flores por el delito de robo con asalto en despoblado y á mano armada, aplicó la ley vigente para juzgar esta clase de delitos que es la de 18 de Mayo de 1872. Esta ley de ninguna manera puede calificarse como anticonstitucional segun pretenden los defensores de los reos, pues fué expedida por el Congreso de la Unión en virtud de las facultades que le conceden los artículos 28 y 29 de la Carta fundamental de la Repúbli-